

EL IMPACTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO Y LAS PIRÁMIDES EN
COLOMBIA

ARACELI ROJAS SALINAS
JAIME ENRIQUE NAVARRO DEL RIO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESPECIALIZACION EN CONTROL INTERNO
BOGOTA
2010

EL IMPACTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO Y LAS PIRÁMIDES EN
COLOMBIA

ARACELI ROJAS SALINAS
JAIME ENRIQUE NAVARRO DEL RIO

PRESENTADO A: DOCTORA LUZ MERY GUEVARA

Ensayo presentado para optar el Título de Especialista en Control Interno

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESPECIALIZACION EN CONTROL INTERNO

BOGOTA

2010

INDICE GENERAL

INTRODUCCION	5
CAPITULO	
I. CONTROL FINANCIERO	5
II. ASPECTOS GENERALES DEL LAVADO DE ACTIVOS	8
III. CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS	9
IV. ACCIONES PARA PREVENIR LA CAPTACION MASIVA DE RECURSOS	13
V. CONSECUENCIAS SOCIALES	14
CONCLUSIONES	19
BIBLIOGRAFIA	20

RESUMEN

Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales se modificaron el Código Penal Colombiano, el objetivo de esta modificación es sancionar de manera ejemplar a los captadores ilegales de dinero. Apparently the improvisación legislativa en materia de delitos financieros, y la ausencia de una política criminal, son los factores que permitieron el desarrollo de esta cadena de fraudes, que solamente dejaron como consecuencia el enriquecimiento de unos pocos a causa del empobrecimiento de muchos colombianos en gran parte del sur del país. Estos lamentables sucesos solo dejarían finales trágicos ocasionados por la ira y el desespero de la gente que todo lo perdió en su afán de conseguir fortuna rápida y fácil.

ABSTRAC

Recently, many Colombians were victims of a chain of fraud arising from the financial pyramids. This led to the national Government to take protective measures against the social emergency; by means of which the Colombian criminal code was amended. The aim is to punish in an exemplary way the illegal rent-seekers. Apparently the legislative improvisation in the field of financial crime, and the absence of a criminal policy, are the factors that enabled the development of this chain of fraud, that only he left as a result the enrichment of a few because of the impoverishment of many Colombians in much of the South of the country. These unfortunate events only would leave tragic end caused by anger and despair of the people who all lost it in his eagerness to get quick and easy fortune

INTRODUCCIÓN

Los recientes fraudes que afectaron a una gran masa de ciudadanos, llevaron al gobierno nacional a dictar normas al amparo de la emergencia social, con las que se modificó el código penal colombiano; su principal propósito fue sancionar severamente a los captadores ilícitos de dinero.

El afán, y ambición por el dinero fácil y rápido, la inteligencia y la habilidad financiera mal utilizadas y la indiferencia de las autoridades, fueron los ingredientes necesarios para generar en Colombia uno de los más grandes fraudes de los últimos tiempos; esta situación condujo al Gobierno a decretar el 17 de noviembre de 2008, el estado de emergencia económica y a adoptar una serie de medidas tendientes a frenar la captación ilícita de recursos por medio de las conocidas pirámides. Éstas, constituyen negocios en los que el capital de unos inversionistas de nivel inferior, es aprovechado para pagarles a otros de nivel superior hasta que, se agoten los recursos por falta de inversión, y sea imposible de cancelar los dineros a los últimos inversionistas, quienes ven desaparecer su dinero como por arte de magia (*Hernández, 2010*).

El presente trabajo pretende demostrar la estrecha relación que existe entre las pirámides financieras y el lavado de dinero en Colombia; además, mostrar el impacto social y económico de este fenómeno, ante la indiferencia de las autoridades y la deficiencia legislativa para controlar su desarrollo y expansión. Para lograrlo, haremos una breve reseña histórica a partir de la década de los 80, mostrando las conductas que posiblemente contribuyeron a este fenómeno, y la normatividad vigente que controlaba estos aspectos para ese entonces; expondremos en que consiste el lavado de activos, y el funcionamiento de las pirámides financieras; posteriormente haremos un análisis de los controles vigentes, y el fenómeno David Murcia Guzmán

(DMG) y Dinero Rápido Fácil y Efectivo (DRFE); finalmente se formularán algunas recomendaciones encaminadas a mitigar el fenómeno, y las consecuencias sociales que dejó en nuestro país.

CAPITULO 1 CONTROL FINANCIERO

En la década de los años 80 surgió un auge en el ejercicio de la banca por el exceso de dinero circulante, y como consecuencia de la medida tomada por el gobierno nacional de ordenar un elevado encaje marginal, los bancos hallaban poco atractivo recibir dineros del público y; de esta forma fue como se empezó a estimular el mercado extra bancario. Tampoco es un secreto que muchos de estos dineros fueron captados por personas que los destinaron a operaciones ajenas al sector bancario (*Hernández, 2010*).

Encadenado a este fenómeno surgieron otras conductas que contribuyeron a la difícil situación que atravesaba el sector financiero, como son las que comentó el ex gerente del Banco de la República, Francisco J. Ortega:

La crisis de 1982 puede considerarse como la culminación de los múltiples desajustes que venía enfrentando el sistema financiero en las últimas décadas. Su crecimiento desordenado en cuanto a tipo y número de instituciones; el tamaño desproporcionadamente grande del sector respecto a su solidez patrimonial; la concentración de la propiedad y las malas prácticas en materia de crédito, dieron lugar a que las fallas internas del sistema se manifestaran plenamente, al entrar la economía en su ciclo recesivo. Además, las entidades que fracasaron y que fueron sometidas a procesos de nacionalización o liquidación eran de propiedad de unas pocas personas y presentaban, sin excepción, manejos claramente irregulares expresados en índices sorprendentes de concentración de cartera por medio

de auto préstamos, falta de diversificación de las fuentes de recursos, y , en general, malos manejos administrativos. (*Ortega, 1984*)

Buscando controlar esta situación se incluyó en el artículo 20 del Decreto 2920 de octubre 8 de 1982, la tipificación como delito, la captación masiva y habitual de dinero sin la respectiva autorización legal, en los siguientes términos: Quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de dos a seis años; además aparece el Decreto 663 del 2 de abril de 1993, con la denominación captación masiva y habitual incorporó el comportamiento en términos muy similares.

Transcurridos algo más de 25 años de vigencia de la norma, es conveniente que se revisen los beneficios que adjudicaron sus defensores. Creemos, sin temor a equivocarnos, que ninguna preocupación genera a los ciudadanos, las penas con las que se amenaza en el Decreto 2920 de 1982, puede advertirse que las personas siguen captando dentro del público, protegidas siempre por la estricta reserva de quienes se benefician de altos intereses y de la evasión de los impuestos, ciudadanos que, en el evento de ser burlados por sus banqueros, se abstienen, la mayoría de las veces, de denunciar el hecho, por el temor a la crítica social, o a un proceso penal en el que también pueden ser vinculados y que puede terminar sin ninguna consecuencia jurídica para el que viola la Ley. Tal situación pudo advertirse en el sonado caso de la Caja Vocacional, en el que los perjuicios materiales fueron evaluados en \$6.472.305.791,96 y que, inexplicablemente, prescribió. (*Hernández, 2010*).

CAPITULO 2

ASPECTOS GENERALES DEL LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados, mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. (*ONU, 2008*)

El lavado de activos es considerado como delito, pues aparte de legalizar dinero sucio, engañan a la gente para formar parte de este ilícito de una manera más sutil, aprovechándose de la situación o avaricia de las personas.

La pirámide financiera es un método de hacer negocio rápido, que consiste en incorporar una cantidad de socios que deben aportar una suma de dinero y que obtienen rentabilidades exageradas según crece la cadena. Las pirámides financieras desde el ámbito comercial, las exhiben como una empresa legal, los que las promueven tratan de encubrirlas presentándolas como una operación normal; un sistema de inversión en proyectos de turismo, de promoción de venta comercial mediante tarjetas o de algo por el estilo; lo que les importa es que las autoridades acepten el engaño y no los traten como captadores ilegales de dinero o como estafadores. (*Orozco 2008*).

La idea no tiene lógica, aunque en algunos casos puede darse y sirvió para proteger, a los inversionistas de las investigaciones por lavado de activos o estafa; si yo tengo millones de pesos recibidos por negocios de droga, existen muchas maneras de lavarlos menos costosas y llamativas que regalarlos al público: el contrabando, la compra de finca raíz, convierten mis dólares sucios rápidamente en bienes normales con poco costo. Pedirle a la gente \$1.000 millones de pesos para darles \$2.000 millones con el objeto de lavar mi dinero sería incomprensible; el lavador se quedaría sin su plata, y estaría poniendo un negocio que atrae inmediatamente la mirada de la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, o las demás autoridades que controlan los activos dudosos.

Estas pirámides milenariamente conocidas y culpables del enriquecimiento de algunos y empobrecimiento de otros, son la salida fácil para afrontar una economía actual como la que vive nuestro país, con sus gastos del día a día pues todos tienen que comer, vestir y nunca se estará conforme con el estilo de vida por mejor que este sea; desafortunadamente en Colombia en que la pobreza y la desigualdad son mas evidentes cada día, aquí llegan ellas con su inmensa publicidad y testimonios que hacen más apetecible esta decisión. (Hernández, 2010).

CAPITULO 3

CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS

El 24 de julio del año 2001 entra en vigencia en nuestro país, un nuevo Código Penal que contiene la Ley 599 de 2000. En el título 10 de este estatuto, llamado Delitos contra el orden económico social, se incorpora un capitulo denominado Delitos contra el sistema financiero, y en el artículo 316 se tipifica el delito captación masiva y habitual de dineros, en los siguientes términos:

“Artículo 316. Captación masiva y habitual de dineros. Quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”.

Ante la escandalosa caída de la pirámide DRFE, y la intervención a la firma DMG construida de la nada por David Murcia Guzmán, el Gobierno Nacional de manera tardía decide intervenir para subsanar la grave situación, de la misma manera como lo hizo en el año 1982, con la figura de emergencia económica, consagrada en la constitución política en el artículo 215. Se trataba, en el caso de las dos pirámides, de entidades que lograron captar cerca de dos billones de pesos, comprometiendo la economía de los departamentos del sur del país. (*Hernández, 2010*).

En una rueda de prensa efectuada el 16 de noviembre de 2008 el Presidente Álvaro Uribe dio a conocer, además del Decreto 4333 que declaró la Emergencia Social, otro paquete de medidas de carácter administrativo, penal y uno más que les da facultades a los alcaldes y gobernadores para detener las actividades captación ilegal de dinero.

El Decreto 4334 contiene el procedimiento administrativo para que el Estado intervenga las empresas captadoras a través de la Superintendencia de Sociedades y suspender las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que por medio de operaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones, puedan generar abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera de manera irregular.

El objeto de este decreto es la puesta en marcha de un procedimiento cautelar que permita que las personas que depositaron dineros en las empresas captadoras lo recuperen con rapidez, si no en su totalidad, por lo menos parcialmente. Para lograrlo, el Gobierno designó como interventor de la firma DMG a María Mercedes Perry quien una vez se posesionó en el cargo hizo las veces de representante legal de la empresa intervenida, y se encargó de devolver los dineros a aquellos ahorradores que invirtieron en esta empresa.

Antes de que los interventores entraran a ejercer sus funciones, la Superintendencia de Sociedades ejecutó la toma de posesión de los bienes de aquellas personas naturales o jurídicas que adelantaran de manera irregular actividades financieras. Este decreto precisó los criterios para la devolución del dinero a los ahorradores, caso en el cual se tuvieron en cuenta el número de personas que solicitaron su dinero y el valor de los bienes hallados durante la intervención. (*El Espectador 2008*)

El tercero de los decretos es el 4335 que habilitó a los alcaldes locales para ordenar el cierre preventivo del establecimiento de comercio, local, oficina o cualquier lugar donde se desarrollen actividades de captación de dinero. Caso en el cual el Alcalde deberá dar aviso inmediato a la Superintendencia de sociedades.

El último de los decretos, fue el 4336 que modificó dos artículos del actual Código Penal para endurecer las penas contra quienes sean hallados responsables del delito de captación masiva y habitual de dineros del público.

Hasta antes de ser emitido el decreto, la pena mínima por este delito estaba en 24 meses y la máxima en 72. Con la modificación, la mínima quedó en 120 meses y la máxima en 240. En ambos casos se impone una

multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Pero el Decreto 4336 adicionó el artículo 316A al Código Penal al establecer que independientemente de la sanción a que se haga acreedor quien incurra en ese delito y no reintegre los dineros captados del público incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales vigentes.

Sobre el tema, el presidente Uribe explicó que al elevar las penas se evita que el delito sea excarcelable. Además, dijo que si alguien captó dineros antes de que entrara en vigencia la emergencia social, y devuelve los dineros será beneficiado con el principio de oportunidad, lo que significa que la Fiscalía le suspenderá el proceso penal.

El abogado penalista y ex procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, opinó que los decretos expedidos por el Gobierno tienen carácter preventivo y represivo, pero no efectos retroactivos y se mantendrán mientras permanezca el estado de emergencia, que se puede prorrogar o convertirse en legislación permanente. En este último caso, deberán cursar trámite en el Congreso de la República.

Para este jurista es importante que con aquellas entidades que no han cesado en sus pagos, se busquen conciliaciones para que nadie salga perjudicado, y luego comenzar un proceso de desmonte gradual. (*El Espectador*, lunes 17 de noviembre de 2008)

En nuestra opinión, el aumento de penas no resulta suficiente para controlar un fenómeno social que está motivado por la imposibilidad de que los ciudadanos accedan al sector bancario, y ningún resultado positivo se logra con la persecución de esta delincuencia si no se modifica el Decreto

1981 de 1988, el cual permite disfrazar las captaciones haciéndolas aparecer como la contraprestación por el suministro de bienes o servicios

CAPITULO 4

ACCIONES PARA PREVENIR LA CAPTACIÓN MASIVA DE RECURSOS

Teniendo en cuenta la gravedad del fenómeno y el impacto que puede causar al orden económico y social, siempre que los dineros que deban canalizarse por el sector financiero, se trasladan a ciudadanos o personas jurídicas que no pueden garantizar su adecuado manejo, su rentabilidad, seguridad y devolución; es necesario emprender acciones y soluciones que tengan trascendencias radicales. No podemos continuar permitiendo este tipo de delitos, creyendo ingenuamente que con la amenaza de una pena, que generalmente no se cumple en razón de los múltiples y generosos mecanismos de excarcelación, vamos a solucionar todas las dificultades de la sociedad.

Si el problema planteado es de orden económico, en este mismo orden debe ser atacado. Si los ciudadanos acuden al mercado extra bancario, lo hacen la mayor parte de las veces, convencidos de que los intereses que reciben de las entidades financieras resultan pequeños y en el entendido de que ellos, no alcanzan a cubrir la devaluación de sus recursos. Por ello, sería recomendable buscar el mecanismo que aumente adecuadamente los beneficios obtenidos por la liquidez que se cede y acortar el margen de intermediación financiera, que en el país alcanza cifras mayores al 14%, uno de los más altos del mundo (*Revista de Derecho Económico*, número 16, de 1992).

En nuestro país, el ahorro es desincentivado debido que no existen exenciones de orden tributario, quienes depositan sus dineros en cuentas

bancarias, ven cómo sus recursos se aminoran por efecto de las retenciones en la fuente, contribución 4 X 1000, y demás costos y gastos bancarios que al final, terminan por desmotivar a quienes depositan sus dineros con la ilusión de una rentabilidad.

CAPITULO 5

CONSECUENCIAS SOCIALES

Esta historia no es nueva en nuestro país; la picaresca nacional es generosa en este tipo de situaciones desafortunadas. El 31 de diciembre de 1841 tuvo lugar la quiebra del grupo LANDINEZ, el imperio financiero que logró crear JUDAS TADEO LANDINEZ y cuyo descalabro no dejó familia bogotana ilesa, contándose que cancelaba intereses del 2% mensual, cuando la mayor cifra de la época ascendía al 1%. (*Arango 1981*).

Más tarde, en 1920, la casa VASQUEZ CORREA, que inició sus actividades en Medellín y extendió sus tentáculos hasta Nueva York, corrió similar suerte que la del grupo LANDINEZ, hasta el punto que el periódico LA DEFENSA de Medellín afirmaba en su editorial del 29 de octubre de ese año: los grandes y pequeños capitalistas corren apresurados a retirar sus depósitos de los bancos, derrumbando en una hora de irreflexible pusilanimidad prósperas y poderosas instituciones que sostenían ayer (*Childe y Arango, 1988*).

En las décadas de 1980 y 1990 sobresalen las quiebras y los malos manejos de CORREA ACEVEDO Y FURATENA, pertenecientes al grupo COLOMBIA de FELIX CORREA, INVERSIONES ORO, EL GRUPO CENTRAL, EL GRUPO SANTA FE, EL GRUPO DUQUE, LA CAJA VOCACIONAL, GENERAL FINANCIERA, de Juan Ricardo Escobar y Guillermo Uribe Holguín, quienes se autodenominaron los picas, y más

recientemente, el grupo GLOTTMANN, COCENTRAL, y PHILAAC, la COOPERATIVA AVANCEMOS, LA FORTALEZA y el peluquero de Facatativá. El último, según la versión del periódico *El Tiempo* del 17 de septiembre de 1992, efectuó una defraudación de más de dos mil millones de pesos. Igual sucedió con la FORMULA TURISTICA DE MEDELLIN; la LONJA DE IBAGUE, CAPITALIZACIÓN Y SEGUROS LTDA; el CENTRO NUMISMATICO EL CENTAVO de Medellín, y doña Socorro Vallejo de Arcila de quien se dice que defraudó a los ahorradores del municipio de Concordia, llevándose consigo más de 1.000 millones de pesos.

Lo curioso es que aún después de conocidos todos estos descalabros, la gente siga confiando sus ahorros a banqueros que reconocen generosos intereses pero que, más temprano que tarde, se alzan con dichos recursos. Así lo demuestran las más de doscientas cincuenta mil denuncias presentadas en el año 2008 ante la Fiscalía general de la nación, la mayoría de ellas contra la firma dinero rápido, Fácil y efectivo (DRFE) y su dueño Carlos Suarez, al igual que el proceso que se sigue a David Murcia Guzmán y su firma DMG, la cual, según el dicho de sus socios Margarita Pabón y Daniel Angel, alcanzó a lavar la suma de 245 mil millones de pesos. (*El Espectador*, 2009).

Los siguientes son ejemplos que registraron en su momento los medios de comunicación, para tener una idea de cómo funcionaba este tipo de negocio, y sus impactos en la comunidad; Para invertir en una pirámide, un hombre vende su casa y pide además préstamos bancarios. En el sur del país, especialmente en Nariño y Putumayo, se dice que la gente ya no trabaja, pues vive de invertir en las pirámides. Algunas de éstas colapsan, y miles de personas salen a la calle en muchedumbre, desesperadas e iracundas por la pérdida de su dinero. Otras miles, por el contrario, se toman

las calles para manifestar su apoyo a una cierta empresa acusada de ser pirámide. Y, al parecer desde el exterior, en una escenografía propia de la alocución de un jefe de Estado, el presidente y aparente dueño de dicha empresa hace un manifiesto político contra el sistema financiero, y llama al pueblo colombiano a rebelarse en defensa de su negocio. El Gobierno Nacional, perplejo e inquieto, recurre a una figura constitucional para casos de grave calamidad económica y social. Este no es más que un panorama superficial del asombroso impacto socioeconómico del asunto de las pirámides, convertido ya en el tema número uno de la vida nacional.

Todo hace pensar que la cuestión de las pirámides tuvo un fuerte impacto social, si miramos las cifras reportadas por la Superintendencia de Sociedades a diciembre 31 del año 2009. La entidad recibió 133.560 reclamaciones por este delito, se intervino y tomó posesión de 54 empresas captadoras ilegales de dinero, e investigó por el mismo delito a 398 personas naturales y jurídicas. De estas investigaciones, 114 entidades no se pudieron verificar, puesto que la mayoría habían desaparecido meses atrás, y las restantes demostraron su inocencia. (*El Nuevo Siglo*, sábado 12 de junio de 2010).

El balance general que deja el delito de las pirámides en Colombia a diciembre de 2009 es devastador; durante este año se recibieron 133.560 reclamaciones por dineros entregados a captadoras ilegales, de las cuales aceptaron 97.702 por un monto de 509 mil millones de pesos y con las intervenciones se lograron incautar 1.038 millones de pesos en efectivo y activos por 47.756 millones de pesos. En total, desde el comienzo de las intervenciones el 17 de noviembre de 2008 y hasta diciembre 31 de 2009, aceptaron 617.356 reclamaciones por 3 billones 421 mil millones de pesos, se devolvieron 120.321 millones, se incautaron 174.110 millones de pesos y

bienes por valor de 215.712 millones de pesos, todo esto para devolver a los afectados. (*El Nuevo Siglo*, sábado 12 de junio de 2010)

El hecho de que estos miles de colombianos, se hayan involucrado en este negocio, y al hacerlo hayan comprometido en alto grado su patrimonio, y además algunos hayan adquirido deuda, comprueba que las consecuencias socioeconómicas son aterradoras. Miles de familias quedaron en la más absoluta quiebra. Esto, además, sucede en tiempos de desaceleración económica, lo cual hace que no sea fácil salir de la ruina mediante la búsqueda de empleo. Mucho nos hemos tranquilizado al saber que nuestra economía está en condiciones más o menos buenas para afrontar la crisis mundial, pero tal vez hemos olvidado este fenómeno, por ser tan difícil de cuantificar, y por hallarse en las márgenes de la economía regular.

Y no sobra pensar en un impacto sobre la cultura ciudadana. Nada bueno puede esperar una comunidad en la cual se exalta la idea de que puede haber prosperidad sin trabajar. Cuando se evapora el fantasma de las pirámides, estas comunidades se estrellan con la realidad y tienen que volver al trabajo, pero ahora en peores condiciones por la quiebra que han sufrido. Las pirámides tendrán, además, un efecto redistributivo que no se ha considerado, y que es totalmente contrario al que pretende defender el ya mencionado David Murcia. El efecto no será en beneficio de los pobres; por el contrario, el dinero de los pobres se redistribuirá por montones hacia unos pocos pícaros. (*Mejía, 2008*).

Esta forma de delincuencia, desde luego, no es exclusiva de Colombia, como se advierte en la nota publicada por la revista *Semana* en su número 569, correspondiente al 30 de marzo de 1993, en la cual se da cuenta de que

Jezdimir V. Asiljevic huyó de Yugoslavia con destino a Atenas después de captar ahorros por 75 millones de dólares mediante la oferta de intereses superiores al 15% mensual. El cronista afirma que la alta renta de los depósitos permitía a más de 100 mil ahorradores de lo que queda de Yugoslavia superar los rigores del bloqueo económico impuesto por la ONU, para castigar la agresión serbia contra Bosnia.

Asimismo se da cuenta en el periódico *El Tiempo* del 3 de noviembre de 1994 (p. 16A), de que el ruso Serguei Mavrodí, director de la compañía MMM captó dinero de la población durante dos años, ofreciendo inmensos porcentajes antes de quebrarse en agosto, dejando a todos sus accionistas en la calle. A pesar de ello, se presentó como candidato al parlamento de su país y recibió un amplio respaldo popular que lo llevó a la cámara baja.

Sobre esta misma situación vale la pena recordar el drama humano que se generó en Venezuela a mediados de la década de 1990, como consecuencia de la quiebra del Banco Latino, resumido por el cronista Orlando Gamboa en *El Tiempo* del 7 de marzo de 1994, de la siguiente manera:

Francisco D'amato Di Miele, se mató de un tiro en la cabeza para lavar su honor manchado. María Da Concepcão Alves murió el día que debió viajar a Portugal, la mató el corazón. María Regina Villamizar fue vista por un vecino en el mercado de Coche, cuando recogía frutas podridas. Antonio Figueroa sacó sus máquinas a la calle en Valencia y las entregó a los obreros de su fábrica de quesos, no tengo otra forma de pagarles, les dijo, y se encerró.

Ellos, como 1,2 millones de personas, seducidos por tasas de interés del 72 por ciento, entregaron hasta su último centavo disponible al Banco Latino. (Hernández, 2010)

CONCLUSIONES

La aparición de las pirámides financieras en nuestro país, obedece en gran parte a la falta de políticas y la intervención tardía por parte del Estado a las captadoras ilegales, sumado a esto, la avaricia de un gran numero de personas en su afán por conseguir dinero rápido y fácil.

La confianza que el mismo Estado generó a la población con su indiferencia ante un hecho evidentemente irregular, despertó anhelos y sueños de riqueza entre la gente, ya que ellos mismos veían como algunos políticos y altos funcionarios del gobierno, depositaban sus dineros en entidades como DMG, y DRFE.

Las rentabilidades muy por encima de las que ofrecen el sector financiero, con pagos constantes, pase lo que pase, sin fluctuaciones y además, es poco transparente.

Miles de familias quedaron en la más absoluta pobreza, y como si fuera poco, sucede en tiempos de desaceleración económica, lo cual hace que no sea fácil salir de la ruina a través de la búsqueda de empleo, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajos informales que agobian nuestro país.

BIBLIOGRAFIA

HERNANDO A. HERNANDEZ. De las pirámides al delito del ejercicio ilegal de la actividad financiera 2010

ARANGO JARAMILLO MARIO. Judas Tadeo Landínez y la primera bancarrota Colombiana (1842) Medellín, Hombre Nuevo, Lealón 1981.

BANCO DE LA REPUBLICA. Introducción al análisis económico, el caso colombiano

FRANCISCO J. ORTEGA, Ensayos sobre política económica No. 4, Bogotá Banco de la República, Departamento de Investigaciones Económicas, 1984.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU, Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros 2008, Bogotá D.C

CHILDE JORGE, y MARIO ARANGO. Bancarrotas y crisis, Bogotá, Grijalbo, 1988.

ANGELA MARIA OROZCO, El Espectador, diciembre 4 de 2008

EI TIEMPO, lunes 29 de diciembre de 2008

EI TIEMPO, marzo 7 de 1994

EI ESPECTADOR, sábado 10 de enero de 2009

EI ESPECTADOR, lunes 17 de enero de 2008

REVISTA SEMANA, edición 1930-1931 diciembre 22 de 2008 a enero 5 de 2009

REVISTA CAMBIO, noviembre 26 de 2008

REVISTA DE DERECHO ECONOMICO, número 16, de 1992

EI NUEVO SIGLO, sábado 12 de junio de 2010

ANDRES MEJIA VERGNAUD, REVISTA CAMBIO, noviembre 26 de 2008

Código Penal Colombiano

CARTAS DE DMG A TRES GOBERNADORES, EI TIEMPO, Bogotá enero 26 de 2010

REVISTA DINERO. La Fuerza de las Redes. Agosto de 2007

LA HISTORIA SE REPITE, REVISTA SEMANA. Noviembre de 2008

EI TIEMPO. Bogotá octubre 11 de 2009, MALAVER CAROL, el desempleo los volvió amos de la casa.

ESPECIALES PIRRY. Bancos en Colombia. Una cruz de ricos y pobres. Canal RCN. Abril 12 de 2009

SANCHEZ CRISTO JULIO. David Murcia Guzmán. Representante legal de DMG. La W 14 de noviembre de 2008